



OLIVER RODRIGUEZ

Esta semana se realizó la primera sesión de la Fuerza de Tarea para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por Organizaciones Criminales. Se trata de una instancia interinstitucional anunciada por el Gobierno, a menos de ocho meses del fin de esta administración, que culmina en marzo próximo.

La iniciativa contempla la participación de entidades que incluyen a la Subsecretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Justicia, Subsecretaría de la Niñez, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Servicio Nacional de Menores, Defensoría de la Niñez, Fundación Paz Ciudadana, Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Unicef, Banco Interamericano de Desarrollo, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería.

Pese al tiempo que resta de gobierno y la existencia de índices que progresivamente han dado cuenta de la mayor participación de menores en delitos, la iniciativa anunciada contempla un trabajo para los próximos

**PLAZO**

Desde el Gobierno informaron que se comenzará con un diagnóstico y que se aplicarían medidas en 14 meses.

14 meses, y comenzará con un diagnóstico nacional con estadísticas de los últimos cinco años, además de un análisis microterritorial de barrios y entornos escolares. Luego de eso, se diseñará un portafolio de intervenciones preventivas adaptables a las realidades territoriales.

“Lo que buscamos es no duplicar esfuerzos, sino que optimizar lo que se está desarrollando y por supuesto desarrollar tareas concretas”, consignó la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Según señalaron desde el Gobierno, la estrategia considera intervenciones iniciales en seis a 10 zonas críticas donde se articulará la oferta existente para disminuir la participación de niños y niñas en bandas u organizaciones delictuales.

En cuanto a cifras, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito remarcaron que de acuerdo con datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), de la SPD, en 2024, el 4,6% del total de victimarios registrados eran menores de 18 años.

En delitos específicos, como en robos violentos, uno de cada cuatro victimarios fue un menor de edad (23,2%), mientras que en el robo violento de vehículos, el 43% de los victimarios eran

Tras anuncio del Gobierno a menos de ocho meses del cambio de administración

# “Llega tarde” y “dudas sobre su continuidad”: las observaciones de expertos a “fuerza de tarea” para prevenir reclutamiento de menores por el crimen organizado

Con todo, entre los consultados destacan el carácter interinstitucional de la propuesta, y que será clave que cuente con un presupuesto asegurado para cumplir con su propósito, aunque también remarcan la ausencia del Ministerio Público y organismos especializados en drogas.



**PARTICIPACIÓN.**— Según cifras del Gobierno, en 2024, el 43% de los victimarios de delitos de robo violento de vehículos corresponde a menores de 18 años.

menores de 18 años.

■ **“Cuántos niños”, “cuál fue la capacidad de respuesta”, sería clave para medición**

Sobre la iniciativa, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson —que integra la instancia—, comenta que se trata de una iniciativa “positiva y necesaria”, pero que “a mediano y largo plazo, el desafío es instaurar

sistemas de información sólidos que permitan comprender cómo opera este fenómeno en cada comunidad”.

En cuanto a cómo evaluar el éxito de la fuerza de tarea, apunta que “no basta con medir la cantidad de talleres o iniciativas desplegadas. Lo relevante será observar cuántos niños fueron efectivamente derivados desde zonas de riesgo, cuál fue la capacidad de respuesta frente a las alertas,

cómo evolucionan las cifras de participación de menores en delitos graves y qué tan consistente resulta la coordinación entre instituciones y comunidades”.

Con todo, admite que “es cierto que anunciar un plan de esta envergadura en la fase final de un gobierno genera dudas respecto de su sostenibilidad. La experiencia en nuestro país muestra que muchas iniciativas en seguridad pierden fuerza o

se interrumpen con los cambios de administración, particularmente cuando no alcanzan a consolidarse”.

Pero apunta que la continuidad de “este esfuerzo dependerá de cuánto logre institucionalizarse. Si cuenta con presupuesto asegurado, una estructura operativa definida y respaldo político transversal, entonces puede trascender el ciclo de gobierno y transformarse

en una política de Estado”.

■ **Importancia de protección de riesgo y los de factores**

Por su parte, la exjefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Pía Greene, en primer lugar, destaca el carácter interinstitucional de la instancia y señala que “la delincuencia es un fenómeno multicausal y que hay que abordarlo desde distintas aristas”.

Con todo, añade que existen oportunidades de mejora y sostiene que “la mirada que se está entregando a los niños que caen en reclutamiento es una mirada más bien de vulneración de derechos, cuando efectivamente tiene parte de vulneración de derechos previos, pero también tiene que ver con otros factores que no se están tomando en cuenta, como factores de riesgo, por ejemplo individuales, conductas disruptivas, entre otras cosas, y familiares, sociales, comunitarios”.

En esa línea, remarca la importancia de “ver que para que suceda este tipo de cosas, para que un joven entre en una senda delictual, sea reclutado por una pandilla o tenga otro tipo de conducta delictual, está sujeto a muchos factores de riesgo y factores protectores. Yo lo primero que habría hecho habría sido analizar cuáles son esos factores de riesgo y esos factores protectores y quiénes los pueden entregar”.

Tras esto, señala que, por ejemplo, “no veo al Ministerio de Educación, no veo al Ministerio de Desarrollo Social, no veo a Senda; la droga es el factor de riesgo más importante. Y si voy un poco más lejos, no veo a Deportes, Cultura”.

■ **“Diagnóstico y análisis debieron haber estado antes”**

En tanto, el investigador de Libertad y Desarrollo Francisco Alcortía apunta que “el Gobierno una vez más llega tarde y sin una propuesta articulada. En los últimos años hemos visto cómo este segmento etario ha ido tomando una mayor relevancia en delitos violentos, siendo utilizados, por ejemplo, por bandas dedicadas al robo violento de vehículos”.

Y agrega que parte del trabajo del que consta la iniciativa debió realizarse con anterioridad.

“El anuncio de que se va a desarrollar una estrategia e intervención llega tarde. Más aún si se comenzará con un trabajo de diagnóstico. Estas acciones como el diagnóstico y los análisis correspondientes debieron haber estado antes, dada la magnitud de la crisis de seguridad que enfrentamos, ya que podrían haberse identificado a través de las estadísticas de las policías, junto con las sesiones de STOP (Sistema Táctico de Operación Policial) o aquellas instancias de trabajo de seguridad local en las cuales participa la subsecretaría”, sostiene.